

GRUPO DE GESTION JURIDICA
ASESORIA DE OBRAS

Bogotá, DC.,

RESOLUCIÓN NRO. 000044 DE 2017

EXPEDIENTE NRO. 10 DE 2001

VISTOS:

Al Despacho se encuentran las presentes diligencias a fin de resolver lo que en derecho corresponde.

RESULTANDOS Y CONSIDERANDOS

1. Esta Alcaldía mediante Resolución No. 31 del 13 de mayo de 2003, declaró infractor al régimen de obras al señor **JAIRO LOZANO QUINTERO**, portadora con cédula de ciudadanía N° **5.967.769** de Ortega Tolima, en su condición de propietario y/o responsable de la obra, que se ejecutó en el inmueble ubicado en la **Calle 49 Sur N° 5- N 82 barrio Marrueco Sur de esta ciudad**, por violación al artículo 99 de la Ley 388 de 1997. En consecuencia ordenó la imposición de una multa por un valor igual a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes. De igual forma le concede un plazo de 60 días para que presente al Despacho de la licencia de construcción del inmueble (Folios 24 y siguientes del expediente)
2. La Resolución No. 31 del 13 de mayo de 2003 se notificó por Edicto fijado el día 07 de julio de 2003 y desfijado el día 18 de julio de 2003. (Folios 34 y 35).
3. La Resolución No. 31 del 13 de mayo de 2003, quedó ejecutoriada el día 25 de julio de 2003. (Folios 37).
4. Mediante oficio N° A.O 987 de 10 de septiembre de 2003, la Asesora de Obras, remite a la Unidad de Ejecuciones Fiscales copias auténticas de piezas procesales para su correspondiente ejecución. (Folios 38 y siguiente).
5. Con escrito radicado en esta Alcaldía el 25 de febrero de 2004 el señor **JAIRO LOZANO QUINTERO**, solicitó pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución N° 31 del 13 de mayo de 2003 (Folio 40).



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

6. Por Resolución N° 112 del 24 de agosto de 2004, no se decretó la pérdida de fuerza de ejecutoria. (Folios 50 y siguientes del expediente)
7. La Resolución N° 112 del 24 de agosto de 2004, se notificó personalmente al señor JAIRO LOZANO QUINTERO el día 13 de octubre de 2004. (Folios 52).
8. La Personera Local por escrito radicado el día 20 de septiembre de 2004, solicita la revocatoria directa de la Resolución 31 del 13 de marzo de 2003 (Folio 53).
9. Por Resolución N° 177 del 19 de noviembre de 2004, se decide no revocar la Resolución N° 031 del 13 de marzo de 2003. (Folios 58 y siguientes del expediente).
10. La Resolución N° 177 del 19 de noviembre de 2004, se notificó por edicto, fijado el día 24 de diciembre de 2004 y desfijado el día 07 de enero de 2005. (Folios 62 y 63).
11. La Resolución N° 177 del 19 de noviembre de 2004, quedó ejecutoriada el día 07 de enero de 2005. (Folios 64).
12. Por Resolución N° 097 del 21 de marzo de 2007, se impuso al señor JAIRO LOZANO QUINTERO, una multa de TRES MILLONES DE PESOS M/L (\$3.000.000.00), concedió un término de 30 días para que se cumpla la orden de demolición. (Folios 79 y siguientes).
13. La Resolución N° 097 del 21 de marzo de 2007, se notificó personalmente el día 18 de abril de 2007, al señor JARIO LOZANO QUINTERO. (Folio 81).
14. La Resolución N° 097 del 21 de marzo de 2007, quedó ejecutoriada el día 18 de abril de 2007. (Folios 83).
15. Mediante oficio la Alcaldesa Local, remite a la Unidad de Ejecuciones Fiscales copias auténticas de piezas procesales para su correspondiente ejecución. (Folio 84)
16. Mediante oficio O.A. 2541 del 20 de septiembre de 2007, la Asesora de Obras, remite a la Unidad de Ejecuciones Fiscales copias auténticas de piezas procesales para su correspondiente ejecución. (Folio 87)
17. Por Auto de Fecha 07 de Enero de 2011, la Alcaldesa Local de Rafael Uribe Uribe, Ordenó llevar a cabo diligencia de demolición para el 22 de febrero de 2011 a las 8 A.M (Folio 171).

Calle 32 No 23 - 62 sur
Código Postal 111811
Tel 3660007
Información Línea 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



18. En virtud del Auto de Fecha 25 de Agosto de 2011, la Alcaldesa Local, Ordenó llevar a cabo diligencia de demolición para el 01 de diciembre de 2011 a las 8 A.M (Folio 172).
19. No evidencia en el expediente que se haya cumplido la orden de demolición, en la fecha fijada para el efecto por parte de la Alcaldesa Local en el año 2011.
20. La oficina de ejecuciones fiscales de la Secretaría de Hacienda Distrital, adelantó procesos de cobro coactivo N° JU533160 y OEF 2008 0138, los cuales se encuentran terminados el primero por saneamiento y el segundo por pago.
21. Dispone el artículo 66 numeral 2° del Código Contencioso Administrativo, "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos: 1...3°. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la Administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos....".
22. Que el despacho entra a evaluar la ejecutividad de la **Resolución No. 31 del 13 de mayo de 2003** y de la **Resolución N° 097 del 21 de marzo de 2007**, tomando como parámetro, el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el tema en SENTENCIA C-969/99, en acción de INCONSTITUCIONALIDAD en Expedientes D-2630, D-2655 y D-2659, acumulados Acción pública de inconstitucionalidad contra los decretos 1064, 1122, 1123, 1131, 1132, 1134, 1135, 1136, 1139, 1142, 1144, 1145, 1146, 1147, 1149, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1178, 1179, 1180, 1181 y 1184, todos de 1999, dictados con base en las facultades establecidas en el artículo 120 de la ley 489 de 1998. Actor: Benjamín Ochoa Moreno y Otros Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ Santafé de Bogotá, D.C., diciembre primero (1º.) de mil novecientos noventa y nueve (1999) LA SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, determinó:

"(...) Acto Administrativo. Existencia, eficacia y fuerza ejecutoria. Suspensión provisional. El actor en su demanda ataca la constitucionalidad parcial del artículo 66, del Decreto 01 de 1984 (C.C.A.), pues considera que viola los artículos 189 numeral 11, 209, 237 numeral 1o., y 238 de la Constitución, con base en la teoría del acto administrativo en cuanto a su existencia, eficacia, ejecutoriedad, presunción de legalidad, y suspensión provisional.

Para la Corporación es necesario hacer un análisis acerca de estos aspectos, con el fin de establecer si la pérdida de la fuerza ejecutoria consagrada en el artículo demandado se ajusta o no al ordenamiento constitucional.

"(...) La teoría del acto administrativo ha sido un tema de profundo estudio por parte de la doctrina nacional y extranjera, y también por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Para efectos del examen de constitucionalidad del artículo 66 (parcial) del Decreto 01 de 1984 (C.C.A.), y de los argumentos expuestos por el demandante, así como por los representantes de los Ministerios de Gobierno y de Justicia y del Derecho, y por el Procurador General de la Nación, es preciso hacer referencia a la existencia, la eficacia, la fuerza ejecutoria y la suspensión provisional de los actos administrativos, sin que sea necesario analizar las diferentes modalidades de los actos administrativos, que consagra el ordenamiento jurídico nacional, salvo las enunciadas y aquella que distingue entre actos de carácter general, abstracto e impersonal y actos de carácter particular, personal y concreto, indicados en la demanda. (...)"

"(...) Los artículos 43 y 44 del Decreto 01 de 1984 (C.C.A.) desarrollan el principio de publicidad de la función administrativa, a través de los actos administrativos de que trata el artículo 209 de la Constitución Política. (...)"

"(...)" Por su parte el artículo 44 *ibidem*, señala que "las demás decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, o a su representante o apoderado"

"(...) La existencia del acto administrativo está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por la Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su expedición, condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto, según sea de carácter general o individual. (...)"

"(...) El Consejo de Estado ha expresado su criterio en reiteradas oportunidades en cuanto que el acto administrativo existe desde que se expide, y su eficacia está condicionada a su publicación o notificación. A juicio de la Corte Constitucional es aceptable el criterio mencionado, según el cual los actos administrativos existen desde el momento en que se profieren, y su validez y eficacia están condicionadas a la publicación o notificación, según se trate de un acto de carácter general, impersonal y abstracto, o de un acto de carácter particular, personal y concreto. (...)"

"(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto com-



porta elementos de hecho, pues una decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada por presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto pero ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber sido atacada oportunamente. Sobre este particular, la Corte Constitucional ha expresado (...)

"(...) Fuerza ejecutoria del acto administrativo. La fuerza ejecutoria del acto administrativo está circunscrita a la facultad que tiene la Administración de producir los efectos jurídicos del mismo, aún en contra de la voluntad de los administrados. (...)"

"(...) El artículo 64 del Decreto 01 de 1984 consagra: "Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados"(...)

"(...) En esta forma, el acto administrativo tiene carácter ejecutorio, produce sus efectos jurídicos una vez cumplidos los requisitos de publicación o notificación, lo cual faculta a la Administración a cumplirlo o a hacerlo cumplir. (...) La fuerza ejecutoria de los actos administrativos, es decir, su ejecutividad, depende entonces de dos aspectos fundamentales: la presunción de legalidad del acto administrativo, siempre que no haya sido desvirtuada, y su firmeza, que se obtiene según el artículo 62 del Decreto 01 de 1984, cuando contra los actos administrativos no proceda ningún recurso, o los recursos interpuestos se hayan decidido, o no se interpongan recursos o se renuncie expresamente a ellos, o cuando haya lugar a la perención, o se acepten los desistimientos. (...)"

El profesor Jorge Olivera Toro considera que las condiciones de ejecutoriedad de los actos administrativos son:

- a) La existencia de un acto administrativo;
- b) Que ese acto sea perfecto;
- c) Que tenga condiciones de exigibilidad, es decir, que sea capaz de producir efectos jurídicos, que sea ejecutivo, y
- d) Que ordene positiva o negativamente al particular y éste no lo acate voluntariamente.

Los fundamentos de la ejecutoriedad del acto administrativo son de carácter político y jurídico. (...) El primero deriva de la urgencia de la satisfacción de las necesidades sociales que la administración debe atender, las cuales no permiten,

demora de ninguna naturaleza. Los intereses generales no pueden tener obstáculo o retraso en su satisfacción. (...) El segundo de los fundamentos, o sea el jurídico, radica en la presunción de legitimidad que tiene el acto administrativo, presunción "juris tantum", o sea, que admite prueba en contrario"⁶ (...)"

"(...) Así mismo, el profesor José Roberto Dromi al referirse a la ejecutoriedad de los actos administrativos, señala: "La ejecutoriedad puede considerarse como una manifestación especial de la eficacia de los actos administrativos, en cuanto estos imponen deberes o restricciones a los administrados, que pueden ser realizados aun contra la voluntad de ellos, por medio de los órganos administrativos"⁷ (...)"

"(...) Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo". La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, ocurre de manera excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo 66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. (...)"

"(...) De esta manera, el citado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma expresa en contrario", y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso del tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición resolutoria a que esté sometido; y cuando pierdan su vigencia (vencimiento del plazo).(..."

Así entonces, el artículo 66 ibídem: establece las causales de PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA: "(...) Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos: 1. Por suspensión provisional. 2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. 4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 5. Cuando pierdan su vigencia. (...)"



23. Que en el presente asunto, debe establecerse el tiempo transcurrido desde la fecha de ejecutoria de la **Resolución N° 31 del 13 de mayo de 2003**, quedó en firme y ejecutoriada el día 25 de julio de 2003, según acta vista a folio 37, fecha desde la cual debe el despacho iniciar el cálculo del termino de ejecutividad del acto en los términos jurisprudenciales y del artículo 66 C.C.A.
24. Que en el presente asunto, debe establecerse el tiempo transcurrido desde la fecha de ejecutoria de la **Resolución N° 097 del 21 de marzo de 2007**, quedó en firme y ejecutoriada el día 18 de abril de 2007, según acta vista a folio 83, fecha desde la cual debe el despacho iniciar el cálculo del termino de ejecutividad del acto en los términos jurisprudenciales y del artículo 66 C.C.A.
25. Que desde el momento de la ejecutoria del acto administrativo sancionatorio, a la fecha ha transcurrido un término superior a los cinco (5) años, tipificándose la causal No. 3 del artículo 66 del C.C.A., es decir, puede el despacho declarar **Resolución N° 31 del 13 de mayo de 2003 y la Resolución N° 097 del 21 de marzo de 2007**, han perdido ejecutividad y eficacia y en consecuencia, dará por terminada la presente actuación administrativa.

Por lo anteriormente expuesto, el Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe, en uso de sus atribuciones legales, en especial de las conferidas por el Decreto 1421 de 1993, en concordancia con la Ley 388 de 1997, modificada por la Ley 810 de 2003,

RESUELVE

PRIMERO: Decretar la Perdida de Fuerza Ejecutoria de la **Resolución N° 31 del 13 de mayo de 2003**, con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Decretar la Perdida de Fuerza Ejecutoria de la **Resolución N° 097 del 21 de marzo de 2007**, con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Declarar el pago total de la multa impuesta en virtud de la **Resolución N° 097 del 21 de marzo de 2007**, con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Dar por terminada la Actuación Administrativa No 010 de 2001, adelantada contra el predio ubicado en **Calle 49 Sur N° 5- N 82 barrio Marrueco Sur de esta ciudad**, en consecuencia, procédase a su desanotación y archivo.

QUINTO: Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición ante el Alcalde Local y el de Apelación ante el Consejo de Justicia, los cuales deberán interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE: 06 MAR 2017



ÁLVARO MEJÍA BRAVO
Alcalde Local

Proyecto Luz Estrella Merchán Espinosa Abogada Contratista
Reviso Gloria Isabel Castillo García

